

Visión histórica de la Legislación española en materia de Educación

Título: Visión histórica de la Legislación española en materia de Educación. **Target:** Comunidad educativa. **Asignatura:** Legislación. **Autor:** Rosa M^a Martínez Carballo, Maestra Especialidad Educación Física, Maestra Educación Física Primaria.

La historia de la educación pública en España tiene una tradición algo menos dilatada que otros países europeos como Francia o Alemania y, sin embargo, ha culminado la convergencia con la de éstos y con la del resto de la Unión Europea (UE) en el año en el programa de trabajo Educación y Formación 2010, que integra todas



las acciones en los campos de la educación y formación a nivel europeo, incluyendo educación y formación profesional (el denominado “proceso de Copenhague”) y el área de Educación Superior (el “proceso de Bolonia”). Por lo tanto, en muy pocos años, cuando los nuevos planes de estudios se completen, las titulaciones europeas serán transparentes y transferibles en el ámbito de la UE.

Este proceso de “europeización” y modernización de España en materia educativa, comenzó en lo que a legislación educativa de carácter general se refiere, en la segunda mitad del siglo XIX, con la Ley de Instrucción Pública de 1857 (conocida como “Ley Moyano”), que reguló por primera vez de manera global la estructura del sistema educativo en España, no existiendo desde entonces otro referente educativo de carácter general hasta 1970, con la promulgación de la Ley General de Educación (LGE).

DE LA LEY DE MOYANO A LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

En ese intervalo de más de un siglo se sucedieron en España diversos periodos de gran agitación social (la Primera República, la Restauración y la dictadura de Primo de Rivera; la Segunda República;

la Guerra Civil; la dictadura del general Franco), que no permitieron un asentamiento de la institución educativa de carácter público, y en los que se acometieron sólo reformas sectoriales del sistema educativo, que casi nunca pudieron llevarse a cabo, ya que generalmente tuvieron un carácter contradictorio con las del período anterior.

Las aportaciones fundamentales de la Ley Moyano, en su contexto histórico, son sin duda su moderación para disminuir la intervención de la Iglesia en la educación, el equilibrio a la hora de establecer los contenidos científicos en la “segunda enseñanza” –asimilable a lo que después serán las “enseñanzas medias” o la “enseñanza secundaria” actual-, el reconocimiento y la consolidación de la enseñanza privada en la educación primaria y secundaria y, finalmente, la definición de los estudios técnicos y profesionales posteriores a la enseñanza “secundaria”.

No se producirán nuevos desarrollos legislativos de carácter general que tengan una duración suficiente para estructurar la educación pública en España hasta 1970. Incluso tras la Guerra Civil, cuando asentado un modelo de educación “católica” y “patriota”, se realizaron sólo reformas parciales del sistema, coincidiendo con la progresiva apertura del país en los años cincuenta, que propiciará un modelo educativo más flexible, en el que se incorporarán reformas como la del Bachillerato (1953), o la de la Formación Profesional, con la creación de las grandes “Universidades Laborales”.

Ya en la década de los años sesenta del siglo pasado, con el aumento de la demografía, la expansión industrial y la llegada del turismo, se hace necesaria una reforma total de un sistema educativo obsoleto, llegándose así a la promulgación de la Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa (LGE) de 1970, parte de cuyo articulado ha permanecido en vigor hasta la reciente aprobación de la Ley Orgánica de Educación (LOE).

LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

La LGE, contemplada en su contexto histórico, introdujo una serie de novedades muy importantes para la educación española, muchas de las cuales que aún hoy se conservan, desde distintas ópticas, en las normas educativas que la han sustituido.

En primer lugar, podemos hablar de la generalización de la educación desde los 6 hasta los 14 años para toda la población, definiendo por primera vez un sistema único de carácter comprensivo para todos los niños comprendidos en esas edades.

En segundo lugar, la “calidad” de la enseñanza, se incorpora por primera vez como desiderátum de un cuerpo legal educativo, desapareciendo el principio de subsidiariedad del estado frente a la enseñanza privada.

Por otro lado, encontramos ya aquí lo que será una preocupación recurrente en los distintos modelos educativos posteriores: la reforma de la Formación Profesional, estableciendo relaciones entre el sistema educativo y el mundo del trabajo, con el fin de dotar al modelo educativo de un carácter profesionalizador.

Finalmente, no debemos olvidar que esta Ley, aunque estructuró un modelo dual a partir de los 14 años, mediante el Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) para alumnos con Graduado Escolar por un lado, y la Formación Profesional (FP) de Primer, Segundo y Tercer Grado (nunca se desarrolló en la práctica) –sin necesidad del título de Graduado Escolar– por otro, introdujo también cuestiones que continúan en el sistema actual, como la evaluación continua o el concepto de ciclo educativo. De hecho, los nuevos “itinerarios” académicos e interconexiones de las distintas enseñanzas que la LOE va a desarrollar recuerdan, aunque desde una concepción de máxima flexibilidad del modelo y con contextos muy diferentes, al modelo diseñado en aquellos años.

Quizá la diferencia de fondo más importante entre esta ley y las que la han sucedido, es la base psicopedagógica subyacente, de corte conductista en la LGE –como correspondía a la época en que se redactó–, y de corte constructivista, como corresponde al paradigma científico dominante en la pedagogía desde los años 80 del siglo XX, para las nuevas leyes educativas.

LA CONSTITUCIÓN DE 1978 Y LA REFORMA DEL SISTEMA EDUCATIVO

En 1975 muere el general Franco, se produce la transición política hacia una Monarquía Parlamentaria y el modelo propuesto en la LGE no es aplicable a este nuevo marco jurídico, que se sustenta en la existencia de un “estado de derecho democrático”. Comienza así un período conocido como la “Reforma” que tendrá su culminación en el año 1990, con la promulgación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE).

En efecto, la aprobación de la Constitución Española en 1978, establece las bases del que habrá de ser el modelo educativo español en su artículo 27: el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza y de creación de centros, el de participación de los padres y alumnos en la gestión y control de los centros y el de recibir formación religiosa y moral acorde con las propias convicciones de los padres, entre otros, la enseñanza básica es definida como obligatoria y gratuita, y su función primordial se enfocará al pleno desarrollo humano y a la formación de ciudadanos capaces de convivir en un estado democrático.

Este mandato constitucional, interpretado a lo largo del tiempo de formas diversas, ha dado cobertura legal a las distintas –y numerosas– reformas del sistema educativo que venimos “sufriendo” en estas dos últimas décadas y que, al menos de momento, han concluido con la promulgación de la Ley Orgánica de Educación en el año 2006, ley de la que nos ocuparemos con detalle más adelante. Ahora queda el desarrollo de la LOE con rango de Ley en todas las autonomías, como ya ha hecho Andalucía con la promulgación de la Ley de Educación de Andalucía (LEA).

Partiendo del marco constitucional, en 1980 se promulgó, bajo el gobierno de la Unión del Centro Democrático (UCD) la Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares (LOECE), con la que se realizó el primer intento normativo de ajustar los principios de la actividad educativa, la organización de los centros docentes, y los derechos y deberes de los alumnos a los principios que marcaba la recién aprobada Constitución.

Los sucesivos gobiernos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) acometieron la reforma en profundidad del sistema educativo establecido por la LGE, promulgándose la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación (LODE) en 1985 y, tras un periodo de experimentación, la Ley Orgánica de

Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) en 1990. El cuerpo legal de esta reforma se completaría posteriormente, en 1995, con la Ley Orgánica de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Educativos (LOPEGCE).

LA REFORMA DE LA REFORMA (LOCE) Y LA “CONTRARREFORMA” (LOE)

Durante los gobiernos del Partido Popular (PP), desde 1996 hasta 2004, se acometió un nuevo proceso de reforma educativa, promulgándose en el año 2002 la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional (LOCFP) y, finalmente, -tras unas modificaciones en los contenidos del Bachillerato conocidas como “la reforma de las humanidades”- la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) promulgada a finales del 2002.

Sin embargo, y tras las elecciones generales de marzo de 2004, el nuevo gobierno del PSOE, mediante Real Decreto, modificó el calendario de aplicación de la LOE, retrasando la implantación de la mayor parte del articulado, mientras tramitaba la nueva Ley Orgánica de la Educación (LOE), que finalmente ha entrado en vigor en 2006 y cuyo calendario de aplicación ha culminado en el curso 2009/10. Esta norma supone una vuelta a aspectos del modelo LOGSE que habían sido modificados en parte por la LOCE, aunque se mantiene, con carácter general, el marco curricular y organizativo de las leyes anteriores. Aunque la victoria del PSOE en las elecciones de 2008, parecía garantizar el desarrollo completo de la LOE y de las leyes autonómicas correspondientes, la imposibilidad de concretar un pacto educativo llevará al Ministerio de Educación a acometer nuevas reformas en el desarrollo normativo de la LOE.

LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN

La estructura de la Ley Orgánica de Educación (LOE), es bastante similar al de la LOCE. Tiene una extensa exposición de motivos dedicada a justificar la reforma de la LOCE. Un Título Preliminar define los fines de la educación, el currículo, el concepto de enseñanza a lo largo de la vida y la cooperación entre administraciones, y el Título I ordena las enseñanzas.

En el Título II, “Equidad en la Educación”, agrupa elementos dispersos –situados en diferentes apartados en la LOCE-, como son los alumnos con NEE (ahora incluidos en el epígrafe “Alumnos con Necesidad Específica de Apoyo Educativo” –ANEAE-), la compensación educativa, la escolarización y el reconocimiento a la función docente. El título III se dedica al profesorado, a su formación, reconocimiento y evaluación. Los Títulos IV y V establecen el modelo de centros educativos y su gestión y organización, respectivamente. La Evaluación y la Inspección ocupan finalmente los Títulos VI y VII. El Título VIII, por último, se refiere a los recursos para el desarrollo de la Ley.

LOS ASPECTOS GENERALES DE LA LOE

Un largo preámbulo nos pasea por la historia de la educación en España y el mundo (resaltando algunos aspectos que hemos presentado en la introducción), haciendo referencia a los trabajos de la UNESCO y a la convergencia europea, en una situación actual cambiante, en la que es necesario establecer un modelo de calidad y equidad (“una educación de calidad en igualdad y para todos”). Se describen en él los tres principios básicos que soportan esta Ley:

- La exigencia de proporcionar una educación de calidad a todos los ciudadanos en todos los niveles educativos.
- La necesidad de colaboración de todos los miembros de la comunidad educativa, llevando el concepto de “esfuerzo” de la LOCE más allá de los alumnos, llamándolo ahora “esfuerzo compartido”, que se concreta además en la escolarización “equitativa de los alumnos”.
- El compromiso con los objetivos educativos planteados por la Unión Europea (EU).

Se establece así un modelo educativo orientado a la “formación a lo largo de toda la vida”, a la flexibilidad del mismo para permitir una mejor relación entre el mundo del trabajo y el mundo educativo –lo que necesita de una mayor autonomía de los centros educativos y la rendición de cuentas de los mismo- y a la formación permanente del profesorado, a la vez que se acomete una simplificación normativa.

La Ley, así, incorpora los avances de anteriores leyes, y se estructura en un título preliminar, ocho títulos, treinta y una disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y ocho disposiciones finales. ●

Bibliografía

Constitución Española de 27 de diciembre de 1978.

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE).

Ley 2/2006, de 3 de mayo, Orgánica de Educación (LOE).

Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 167 de 14 de julio).

CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 220 de 14 de septiembre).

Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOE nº 20 de 23 de enero de 2008). (LEA).

<http://www.educacion.es/cide/jsp/plantillaAncho.jsp?id=eurydice> Página de la red de la Unión Europea “Eurydice” sobre el sistema educativo español y su evolución.

<http://www.mec.es/educa/sistema-educativo/index.html> Página del MEC con acceso a las distintas enseñanzas del sistema educativo español.